

NEW LEFT REVIEW 146

SEGUNDA ÉPOCA

MAYO-JUNIO 2024

ARTÍCULOS

RICHARD BECK La política exterior de Biden 7

ENTREVISTA

SAHRA WAGENKNECHT La situación de Alemania 37

ARTÍCULOS

PERRY ANDERSON Innovadores de alto y bajo perfil 59

PIERRE VESPERINI ¿Qué hacer con el pasado? 113

CRÍTICA

OLIVER EAGLETON El capitalismo de *stakeholders*,
otra vez 135

LOLA SEATON Buenos errores 146

JOY NEUMEYER Historias de Moscú 161

WWW.NEWLEFTREVIEW.ES

© New Left Review Ltd., 2000

Licencia Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)



SUSCRÍBETE

ts
traficantes de sueños



CRÍTICA

Will Hutton, *This Time No Mistakes: How to Remake Britain*, Londres, Bloomsbury, 2024, 448 pp.

OLIVER EAGLETON

EL CAPITALISMO DE *STAKEHOLDERS*, OTRA VEZ

Las especulaciones sobre el carácter que tendrá el próximo gobierno laborista de Ukania tienden a ser proyectivas. Para Paul Mason, que se autodenomina marxista, el punto de vista de Keir Starmer es «socialista e internacionalista»; para George Eaton, de *The New Statesman*, se basa en un «radicalismo tranquilo»; para el politólogo centrista Steven Fielding es «corporativista blando», mientras que para el laborista conservador, integrado en la facción Blue Labour, Maurice Glasman es «profundamente conservador». Muchos leales a Starmer, que únicamente ven en su programa lo que quieren ver, van a llevarse un chasco inevitable cuando lo vean realizado. Entre ellos, el columnista de *The Observer* Will Hutton no es ajeno a este tipo de decepciones. En su éxito de ventas *The State We're In* (1995) Hutton analizó el legado del thatcherismo –salarios de miseria, atrofía industrial, decadencia social– y presentó a Tony Blair, un líder «explícitamente comprometido con el desarrollo de una socialdemocracia británica», como un posible salvador. El libro, así como sus secuelas, *The State to Come* (1997) y *The World We're In* (2002), abogaba por un capitalismo humano capaz de sustituir a la variedad adquisitiva que se había adueñado de Gran Bretaña y Estados Unidos, argumentando que los intereses de los accionistas [*shareholders*] debían conciliarse con los intereses de los grupos, colectivos o personas involucrados, implicados o afectados [*stakeholders*] por el funcionamiento de las empresas, es decir, con los de la sociedad en general.

Hutton esbozó las reformas de las que dependía esta concepción: constitucionales (una segunda cámara elegida, una descentralización significativa y representación proporcional), económicas (una regulación más estricta de la City de Londres, bancos de inversión regionales y renacionalización de los servicios públicos) y sociales (prestaciones sociales universales, planes de empleo públicos y un fondo nacional de seguros). Pero al llegar a Downing Street, Blair dejó claro que sus prioridades estaban en otra parte y que pasaban por recortar las ayudas a las madres solteras y a los discapacitados, mientras se preparaba para bombardear Iraq. El Nuevo Laborismo, observaba Hutton a finales de la década de 1990, había decidido que «la cautela era mejor que el coraje» y que sus consejos no eran necesarios. Ahora, un cuarto de siglo después, la historia parece repetirse. Con el Partido Laborista de nuevo en el poder, Hutton ha escrito otro tratado, cuyo título podemos calificar de pasivo-agresivo, *This Time No Mistakes* sobre cómo humanizar el capitalismo británico. Starmer, nos dice, es un «radical que puede transformar el país» y «lanzar una revolución progresista» capaz de encontrar el equilibrio adecuado entre colectivismo e individualismo. El requisito necesario para conseguirlo es el mantenimiento de la unidad de propósito del partido y la recuperación de su tradición filosófica liberal de izquierda, que con demasiada frecuencia ha descuidado bajo los equipos dirigentes precedentes.

Hutton nació en 1950 en Woolwich, donde su padre, antiguo capitán de la Real Artillería, trabajaba en la fábrica local de municiones. Estudió economía y sociología en Bristol y obtuvo un máster en administración de empresas en el European Institute of Business Administration, sumergiéndose en los escritos de Ricardo, Smith y Marshall. Tras un periodo como agente de bolsa, fue redactor de economía en *Newsnight* y luego en *The Guardian*, antes de ascender a la dirección de *The Observer*. Gran conocedor del mundo de las consultorías y los *think tanks*, Hutton copreside un consorcio de ética empresarial llamado «The Purposeful Company» y dirige una empresa de tecnología espacial. Pasó la década de 2010 como director de un *college* en Oxford y desde entonces ha ocupado cargos en la London School of Economics y en la Academy of Social Sciences. Todavía agraviado por el rechazo de sus consejos por Blair, que optó por una nefasta alianza con el neoconservadurismo estadounidense, Hutton sigue considerando la derecha laborista como su hogar intelectual y creyendo que los «errores» de su último gobierno pueden ser redimidos por el próximo.

El nuevo libro de Hutton parte de la premisa de que el objeto de la empresa comercial no consiste en maximizar los beneficios, sino en servir a un propósito social, no siendo los excedentes obtenidos más que un feliz subproducto. «Estas son verdades que los mejores empresarios y financieros conocen, los cuales, sin embargo, tienen que someterse a una cultura derechista que intenta negarlas». Los primeros capítulos describen el auge

de esta cultura en el Reino Unido y en Estados Unidos, donde desbarató los logros de Atlee y Roosevelt respectivamente y preparó el terreno para un declive secular. Hutton subraya la trayectoria común de las potencias atlánticas, cuyos «pasos en falso ideológicamente hablando» las alejaron de aquel saludable acuerdo de posguerra y las condujeron a una vorágine de libre mercado que culminó en los horrores gemelos del Brexit y Trump. Esto las ha vuelto vulnerables a las amenazas civilizatorias del siglo XXI: el ascenso de la China «leninista» y de la Rusia «neofascista», el despegue de la inteligencia artificial y la amenaza del cambio climático. Afortunadamente, sin embargo, Biden ha revivido el espíritu del *New Deal* y ha afrontado estas crisis sin titubeos, recurriendo a la intervención estatal para desencadenar una inversión privada masiva, al tiempo que se ha mantenido firme frente a los antagonistas de Occidente. Starmer está preparado para seguir su ejemplo. Pero, para tener éxito, advierte Hutton, tiene que articular una alternativa ideológica coherente al neoliberalismo: una síntesis del «nuevo liberalismo (o liberalismo social) y el laborismo socialdemócrata, en cuyo núcleo está la ética del socialismo».

Hutton traza la genealogía de esta alternativa, empezando por Adam Smith, un «izquierdista encubierto» que defendió la fiscalidad progresiva y la educación pública, porque reconocía que el desarrollo capitalista dependía de instituciones colectivas fuertes. En este frente, sostiene Hutton, «Gran Bretaña fue pionera en Europa», creando un «contrato social embrionario» con la *Poor Law* de 1597, estableciendo el Banco de Inglaterra en 1694 y exigiendo a cada una de sus empresas nativas que «declarara el propósito para el que se constituía», «garantizando que los valores privados del capitalismo se alinearan, hasta cierto punto, con los valores sociales». El problema fue que estas instituciones se desarrollaron lenta y orgánicamente y no con arreglo a un plan coordinado. Se «dieron por sentadas» y se descuidó su papel a la hora de impulsar la Revolución Industrial. Este descuido hizo que el mercado pareciera un sistema milagrosamente autorregulado, lo cual propició la creencia del *laissez faire*: un utopismo insípido que a mediados del siglo XIX había logrado seducir al *establishment* político británico, propiciando un modelo económico caracterizado por tasas de inversión productiva bajas y excesivamente dependiente del Imperio.

El marxismo se demostró como un antídoto inútil dada su falsa premisa de que el capitalismo se hallaba preso de irresolubles contradicciones. Más prometedoras, en opinión de Hutton, fueron las teorías del *new liberalism*, según las postularon Green, Hobson y Hobhouse, que profundizaban en las ideas de Smith haciendo hincapié en la relación recíproca existente entre individuo y sociedad: las formas de «acción social y propiedad social», que sustentan la acumulación. Estos pensadores ejercieron una influencia directa en los gobiernos liberales del periodo 1906-1914, que introdujeron

el sistema nacional de Seguridad Social [*National Insurance*], los impuestos redistributivos y los derechos educativos como parte de un incipiente Estado del bienestar. Estos logros fueron desmantelados, sin embargo, tras la Primera Guerra Mundial, cuando Lloyd George cedió a la presión de las elites en favor de la ortodoxia fiscal, desacreditando a su partido y permitiendo que los laboristas les superaran. MacDonald también recayó en la mencionada ortodoxia fiscal en cada coyuntura crucial, practicando una «moderación defensiva» en lugar de ampliar el proyecto reformista. A medida que el liberalismo y el laborismo traicionaban sus ideales, Gran Bretaña abandonó paulatinamente el modelo socialdemócrata y optó por la llamada «preferencia imperial», esto es, por la introducción de «aranceles tras los que crecían los monopolios y los cárteles, desaparecían los estímulos para impulsar la innovación y se garantizaban altos márgenes de beneficio, que permitían al sistema financiero seguir desvinculado de las empresas». Tanto dentro como fuera del gobierno, los conservadores siguieron marcando la agenda nacional durante la década de 1930.

Subterráneamente, sin embargo, se abrían camino corrientes intelectuales progresistas. Tawney trazó las coordenadas del «socialismo ético», es decir, que la propiedad debe cumplir una función social y las oportunidades deben igualarse, mientras que Keynes tradujo las ideas del nuevo liberalismo en una política macroeconómica práctica. Hizo falta la Segunda Guerra Mundial para que estos preceptos calaran en los dirigentes laboristas, que empezaron a construir un orden social popular y compasivo en 1945. Sin embargo, en ese momento el partido cometió dos errores, que Hutton considera fatídicos. En primer lugar, presentó su programa de bienestar como un esfuerzo socialista en lugar de liberal, lo que lo convirtió en un blanco fácil para la derecha anticomunista; y, en segundo, «no abordó las profundas debilidades estructurales que sufría la economía» británica al no lograr «desmantelar el sistema defensivo imperial y organizar un Estado desarrollista».

Esta tarea recaería más tarde en Wilson. Al recapitular el comportamiento de los gobiernos laboristas de las décadas de 1960 y 1970, Hutton elogia su «espíritu científico» y sus políticas productivistas, pero observa que tampoco ellos fueron capaces de desarrollar la arquitectura institucional necesaria para que Gran Bretaña fuera competitiva. Lo que se lo impidió fue la «profunda obstinación de los principales intereses creados», a saber: el sector financiero y los sindicatos. Si estas fuerzas hubieran reconocido la solidez del plan nacional de Wilson, el país se habría revitalizado y el thatcherismo habría nacido muerto. Por el contrario, su intransigencia – especialmente la del movimiento obrero organizado, que se negó a aceptar el paradigma contenido en libro blanco *In place of strife* [«en lugar del conflicto»] de apaciguamiento de la conflictividad sindical– allanó el camino a

los herederos de Hayek. Aunque su opinión general sobre la trayectoria de Thatcher sigue inamovible, Hutton le atribuye el mérito de haber tomado las medidas necesarias contra la militancia obrera; Thatcher «abolió la sindicación obligatoria, ilegalizó los piquetes solidarios e impuso votaciones para decidir las huelgas», creando un «nuevo mercado laboral flexible», que atraería la inversión y garantizaría que los empleados no estuvieran «casados con las empresas».

Sobre Blair recayó la responsabilidad de preservar los logros de la década de 1980 –prosperidad, flexibilidad, autosuficiencia– en un marco socialdemócrata actualizado. Sus intenciones eran puras, escribe Hutton, y Blair consiguió mejorar los servicios públicos al tiempo que fortalecía las relaciones con la Unión Europea. Su error fue, sin embargo, querer serlo «todo para todos» y su liderazgo careció «de confianza en sí mismo», lo cual se manifestó en una reticencia a «considerar qué reformas necesitaban las estructuras básicas del capitalismo británico, y, sobre todo, a aplicarlas». A la postre, «Blair puso en peligro su propio proyecto al no definirlo mejor». «La delimitación de los contornos de la ética del socialismo y del liberalismo progresista quedaron poco claros, dejando demasiado margen para establecer compromisos con la derecha». El resultado fue la renovación de la hegemonía *tory* en su forma más destructiva hasta la fecha, así como la reacción infantil del corbynismo. Ahora que estos experimentos políticos se han ido al traste, el camino está despejado, sin embargo, para que Starmer dote al Partido Laborista de «una filosofía propia y distintiva, que articule su propia posición moral, y ofrezca un programa político vigorizante».

¿En qué se traduciría esto en la práctica? Un gobierno de Starmer debería empezar por establecer su visión del «bien común» para guiar al sector privado, comenzando por reunir suficientes recursos para hacerla realidad y utilizando la inversión pública a fin de estimular una mayor productividad en un ciclo autopropulsivo. Habría que gastar un total de 2 billones de libras esterlinas a lo largo de un periodo de veinte años en iniciativas verdes y redistributivas, indicando las prioridades de financiación establecidas al inicio de cada legislatura. Habría que revocar las actuales reglas fiscales y el Banco de Inglaterra debería ampliar su mandato para abarcar el crecimiento económico y el empleo. Para vencer la resistencia del aparato de Whitehall, el Tesoro debería dividirse en una Oficina del Presupuesto y un Ministerio de estrategia económica, que, a su vez, supervisaría una serie de reformas del sistema crediticio: fortalecimiento de instituciones como el Banco de Infraestructuras, «reducción del riesgo» de los préstamos hipotecarios y concesión de planes de amortización a largo plazo adaptables a los deudores. Los proveedores de pensiones deberían consolidarse en cuatro o cinco «superfondos», que, junto con un nuevo fondo soberano, concederían generosos préstamos a la industria británica.

Dotadas de abundante liquidez, las empresas estarían hipotéticamente más dispuestas a reconocer sus obligaciones para con sus empleados y viceversa. Se instauraría la negociación colectiva por sectores, los trabajadores formarían parte de los consejos de administración y se impondrían multas a los empresarios por incumplimiento de los convenios, todo lo cual haría redundante en buena medida el recurso a las huelgas. Además de financiar programas de trabajo y formación profesional, el gobierno debería abordar la desigualdad educativa, insistiendo en que las escuelas privadas aumenten el número de estudiantes becados a un tercio del total. Debería revertir además la espiral desastrosa del National Health Service, el servicio nacional de salud, mediante el aumento del gasto, y remediar la crisis del alquiler aumentando los salarios, las prestaciones y el parque de viviendas. Sin embargo, es probable que nada de esto ocurra mientras no se reforme el sistema cuasi monárquico de Westminster. Abolir el sistema electoral mayoritario uninominal [*first-past-the-post*] y la Cámara de los Lores sería un buen comienzo, pero potenciar la función pública y el gobierno local resultará igualmente esencial.

This Time No Mistakes presenta su plan para «rehacer Gran Bretaña» a modo de resolución de una lucha prolongada entre varias versiones rivales del capitalismo, un propósito más ambicioso que el que se trazó en *The State We're In*, que se limitaba a la coyuntura inmediata. La estructura del nuevo libro es inusual. Sus primeros capítulos tratan de la ofensiva thatcheriana, del ascenso del blairismo y de la catástrofe del Brexit; los últimos se remontan a la Revolución Industrial y sitúan los mismos acontecimientos en la *longue durée* del liberalismo británico. Sin embargo, hay un cierto deslizamiento entre estas dos secciones. En la primera, Hutton argumenta que el neoliberalismo hizo descarrilar una floreciente socialdemocracia que exhibía las virtudes del capitalismo. «Hasta la elección de la señora Thatcher», afirma, los gobiernos comprendían la necesidad de la existencia de instituciones públicas, que «sostienen nuestras vidas» e «impulsan la economía»; su decisión de inmolarlas la convirtió en la «principal arquitecta del sostenido declive británico». De haber durado más tiempo y si hubiera llevado más lejos su programa, el New Labour podría haber restaurado este noble consenso, pero sus tímidos logros fueron aplastados por la austeridad de la coalición posterior y el voto a favor de abandonar la UE. En la segunda sección, sin embargo, esta narrativa histórica queda desmentida. Aquí, un Hutton más desilusionado muestra cómo el Partido Liberal «se falló a sí mismo y falló al país», cómo Ramsay MacDonald se vendió a los *tories*, cómo Attlee desperdició la oportunidad de construir una socialdemocracia duradera, y cómo Wilson y Callaghan «subestimaron la necesidad de reformar el sistema financiero, los aranceles, los sindicatos y el exceso de monopolios», dejando intactas las decrepitas estructuras del sistema político británico. Aunque Hutton afirma que «los gobiernos no conservadores que

han tenido éxito en los últimos ciento veinticinco años han conseguido [...] aunar estas dos vertientes progresistas» del «liberalismo social» y del «socialismo ético», la mayor parte de su libro se lee como un relato detallado de su incapacidad para hacerlo.

Esta incoherencia se traduce en que Hutton es incapaz de decidirse en cuanto al objetivo de su diatriba. Los primeros capítulos culpan del fracaso económico del Reino Unido al neoliberalismo, el cual, según sugiere, era una ideología extranjera importada de Estados Unidos, que contrastaba con la naturaleza fundamentalmente benévola del capitalismo británico del siglo XX. Sin embargo, en los capítulos siguientes, cuando Hutton se ve obligado a enfrentarse a la realidad de este último, su bestia negra pasa a ser el *laissez faire*, una doctrina que, en su opinión, hunde sus raíces en las particularidades del desarrollo socioeconómico secular de Gran Bretaña. Lo que en un principio se presentaba como una imposición exógena se replantea ahora como un trastorno endógeno, lo cual puede resultar fatal para la tesis de Hutton, ya que el equívoco sobre aquello a lo que se opone introduce la correspondiente incertidumbre en cuanto a aquello que defiende. Después de haber dicho a sus lectores que existe un precedente histórico claro del modelo de las «partes interesadas» [*«stakeholder model»*], al que simplemente deberíamos volver, posteriormente nos enteramos de que en realidad nunca ha existido, excepto como un ideal abstracto y escurridizo.

Esto coloca al autor en una situación comprometida. Debe sostener que la interacción de las partes interesadas [*«stakeholding»*] es la forma pura y auténtica del capitalismo, aunque su única realidad esté en la imaginación. Y debe mantener que un capitalismo rapaz, excesivo y dominado por las finanzas es una aberración, aunque Gran Bretaña apenas haya conocido otro tipo. Trata de salir del embrollo atribuyendo los fracasos de cada uno de los gobiernos liberales y laboristas a meras contingencias, que—en la mayoría de los casos se atribuyen a los defectos personales de sus líderes. Así, Lloyd George carecía de «ideas prácticas radicales»; MacDonald sufría de poca «confianza en sí mismo»; Callaghan era «tramposo»; Blair y Brown «no tenían la confianza en sí mismos ni la curiosidad intelectual» necesaria para «reformar el motor capitalista», y así sucesivamente. De acuerdo con Hutton, estos gobiernos progresistas habrían comprendido la verdadera esencia del capitalismo de no ser por ciertos defectos de carácter o errores evitables que les hicieron capitular ante las ortodoxias reaccionarias. Tales ilusiones le llevan a reproducir el argumento del *laissez-faire* que dice rechazar, a saber: que los mercados funcionarían sin problemas, en beneficio de todos, si no estuvieran distorsionados por interferencias externas. La única diferencia es que, en su modelo, la influencia maligna no es la intervención del Estado, sino las ideas equivocadas de la derecha a las que los liberales se habrían plegado con demasiada facilidad.

Hutton afirma que «las empresas no son tanto maximizadoras de beneficios como “satisfacedoras” de beneficios», un neologismo desgarrado que define a quien «encuentra soluciones satisfactorias para un mundo más realista». ¿En qué se basa para afirmar esto? Hutton nos dice que la empresa es naturalmente reacia al riesgo: «Necesita un beneficio suficiente ante un riesgo dado en lugar de un beneficio máximo susceptible de poner a la organización en peligro», lo cual la incentiva a asociarse con el Estado y a promover el bien común. En buena lógica, sin embargo, no hay diferencia entre «beneficio suficiente ante un riesgo dado» y «beneficio máximo». Estos imperativos son idénticos. Tampoco está claro por qué la evitación del riesgo debe implicar la consideración del beneficio social: la inversión en las industrias del petróleo y el tabaco sigue siendo alta precisamente porque ofrece rendimientos seguros. Cuando el sector privado se asocia con el Estado para «reducir el riesgo» de sus actividades, esto se traduce generalmente en que socializa sus pérdidas mientras acapara sus ganancias. Este es un problema que Hutton pareció reconocer en 1995, cuando defendió la renacionalización de servicios públicos como el agua y la energía, advirtiendo que «las actividades económicas que son monopolios naturales [...] deben ser de propiedad pública para garantizar el interés público». Por el contrario, *This Time No Mistakes* avala un *statu quo* en el que las empresas privadas que prestan servicios esenciales, cuando quiebran, son temporalmente renacionalizadas, obligando a la población a rescatarlas hasta que se encuentren nuevos inversores. (El pasado verano trascendió la noticia de que la presidenta de la segunda mayor compañía de suministro de agua del Reino Unido (Severn Trent) había invitado a sus colegas ejecutivos de otras empresas privadas proveedoras de servicios esenciales a una «mesa redonda extraoficial» presidida por Hutton para discutir cómo estas podrían evitar su renacionalización y ello ante el reconocimiento generalizado de que la privatización ha sido una catástrofe).

Hutton también enumera una serie de empresas exitosas «para las que el sentido del propósito es su norte y su guía», que supuestamente reflejan los valores de su teórica *stakeholder society*, o sociedad de las partes interesadas. Entre ellas se encuentra Unilever, una multinacional de bienes de consumo que ha sido acusada de beneficiarse del trabajo infantil, impulsar la deforestación tropical, exponer a sus empleados de las plantaciones de té a la violencia étnica y contratar guardias de seguridad privados que atacaron a sus trabajadores en huelga con spray de pimienta y balas de goma. También menciona con aprobación al Lloyds Bank, uno de los principales inversores en la industria armamentística mundial, que ha gastado miles de millones en financiar bombas de racimo y armas nucleares, además de la maquinaria de guerra israelí. El gigante de la subcontratación Capita es calificado de «pionero», a pesar de estar implicado en el famoso escándalo Windrush

a tenor del cual recibió miles de millones de dinero público para detener y deportar a migrantes. Y a la empresa Severn Trent, orientada por «fines sociales», se la aplaude por sus «índices de satisfacción medioambiental, fiabilidad y satisfacción de los consumidores», aunque Hutton no menciona que ha sido multada en repetidas ocasiones por bombear cientos de miles de litros de aguas residuales no tratadas a los cursos de agua británicos. Después de su vano empeño en presentar a los «gobiernos no conservadores de los últimos ciento veinticinco años» como ejemplos del capitalismo correcto, Hutton busca empresas de las que pueda afirmarse que encarnan ese espíritu. Una vez más, la realidad se interpone en el camino.

Si el razonamiento de Hutton se basa en la lógica oculta del *laissez faire* —la de un capitalismo típico-ideal que armonizaría los intereses públicos y privados—, sus prescripciones políticas la sacan a la superficie. Algunas de sus recomendaciones, como la reforma electoral y el aumento del gasto, son de sentido común; pero llama la atención cuántas de ellas acaban pidiendo más mercantilización como solución a los males de Gran Bretaña. Al igual que se alaba a Thatcher por impulsar la «flexibilidad», se alaba al Nuevo Laborismo por «abrir al mercado» la educación superior mediante la introducción de tasas. Las academias y las escuelas privadas se describen como instrumentos efectivos para el «desarrollo del capital humano», mientras se atribuye al mercado único de la UE el mérito de exponer a Gran Bretaña a la «intensidad de la competencia». Hutton propone atraer inversiones extranjeras creando un mercado de propiedad intelectual, de modo que «las patentes y los derechos de autor puedan negociarse al igual que se negocian las acciones y los bonos». Insiste en que su controvertido Fondo Soberano de Inversión debería funcionar «exclusivamente de acuerdo con criterios comerciales y empresariales a largo plazo de modo que las decisiones de inversión no se vean impulsadas por intervenciones políticas». Y propone luchar contra el monopolio siguiendo los principios de la teoría de la elección racional: si los británicos son demasiado fieles a las «empresas rentistas», habría que fomentar, pues, «terceras partes, que valoren los bienes y servicios de forma independiente» para «ofrecer a los consumidores una mejor orientación».

A lo largo de todo el libro, Hutton denuncia las soluciones del libre mercado dejando entrever, sin embargo, la atracción culpable que siente hacia ellas, y esta ambivalencia le lleva a contradecirse varias veces. Así, critica los créditos fiscales como «la opción por defecto de los gobiernos del *laissez-faire*», que son claramente «ineficaces, a pesar de su atractivo ideológico». Pero en otros pasajes pide «créditos fiscales para los inversores domiciliados en Gran Bretaña, que inviertan en la industria británica» y «créditos fiscales sobre los dividendos», además de respaldar los incentivos fiscales concedidos a las empresas introducidos por Biden. Exige «requisitos legales para

disponer de convenios colectivos» y que «obligaciones derivadas de estos sean legalmente exigibles», pero también quiere «que los acuerdos empresariales y laborales se suscriban con un apretón de manos, que es más eficaz y barato que los costosos convenios legales». Su teoría general es que el planeamiento estrecho de miras basado en el «valor para el accionista» debe dar paso a una preocupación más amplia por el «valor para todas las partes interesadas». Pero, ¿a quién debe confiarse la tarea de garantizar que las empresas privadas cumplan su objetivo social declarado? «Los accionistas les harán rendir cuentas, como debe ser».

Gran parte de la confusión de Hutton se debe a su dificultad para definir la relación correcta entre el mercado y el Estado. Por un lado, no se puede dejar que el mercado actúe por su cuenta, ya que esto nos acercaría a la ideología «neoliberal», contraria a su teoría de la sociedad de las partes interesadas. Por otro, no hay necesidad de ejercer control alguno sobre el mundo empresarial, pues se supone que este se halla predispuesto a servir a la comunidad en general. Hutton rechaza la polarización entre el *laissez faire* y el intervencionismo, y utiliza en su lugar la oscura metáfora de los «guardarraíles»: el gobierno debería «crear guardarraíles capaces de guiar el comportamiento empresarial»; «el capitalismo necesita una vigilancia constante, árbitros y guardarraíles»; «Los no conservadores pueden combinar la acción gubernamental imaginativa y la creación de instituciones para dotar al capitalismo de los necesarios guardarraíles». Todo ello podría sugerir la idea de la interposición de obstáculos a la acumulación. Pero si, como afirma Hutton, las empresas más exitosas ya son empresas «guiadas por un propósito útil», entonces la palabra adquiere una connotación diferente: señalar a las empresas la dirección correcta viene a significar allanarles el camino que ya han emprendido.

En este marco, el principal papel del Estado consiste en animar con amabilidad a las empresas a que persigan sus propios intereses. No tiene mucho sentido desarrollar mecanismos de aplicación sólidos, ya que no existe un conflicto real entre la sociedad y la extracción de plusvalor. Cualquier político que intente contraponerlos debe ser descartado como un demagogo populista, de ahí el desdén de Hutton por el corbynismo. Por supuesto, a primera vista su programa coincide significativamente con el del antiguo líder laborista. Ambos afirman creer en el impulso de la inversión pública, el aumento de los salarios y el bienestar, la construcción de viviendas sociales, el fomento de la democracia en el lugar de trabajo, el debilitamiento del Tesoro y la desvinculación de la economía de la City. La diferencia es que Corbyn era lo suficientemente realista como para saber que la introducción de tales reformas conllevaría enfrentarse a las empresas en lugar de colaborar con ellas. «En un mundo corbynista —escribe Hutton— lo público y lo privado se convertirían en dos campos económicos hostiles en el que

el sector público contaría como el socio dotado de más poder». Por ello, Corbyn es tachado de «socialista centralizador», vendedor ambulante de ideas «antiguas y pasadas de moda», practicante de la «política identitaria» y «hombre inadecuado», que «ha terminado personificando todas las contradicciones eternamente irresueltas de la política de izquierda».

A la inversa, hay un abismo sustancial entre el programa de Starmer –disciplina fiscal, mano dura contra los migrantes, endurecimiento del autoritarismo– y el de Hutton. Nadie podría afirmar con todo el aplomo que la actual iteración del Partido Laborista representa una gran síntesis de liberalismo y socialismo; sus propios dirigentes invocan más a menudo el conservadurismo y el capitalismo. Tres décadas después de *The State We're In*, el autor está a punto de descubrir que su afán reformista sigue siendo mal recibido en Westminster. Tal vez sea un reconocimiento implícito de este hecho el que Hutton, a pesar de argumentar que «Gran Bretaña no tenía por qué reproducir los errores de Estados Unidos», y que el país debe inspirarse en su tradición liberal de izquierda autóctona, termine aconsejando a Starmer que mire a Biden como modelo. Y si bien es inverosímil pensar que Sir Keir vaya a hacer realidad la visión socialdemócrata de Tawney, es más probable en cambio que siga el ejemplo de un presidente que ofrece exenciones fiscales al capital verde, mientras promueve una Nueva Guerra Fría con China y hace posible la perpetración de un genocidio en Gaza. En este punto, al menos, Hutton está en lo cierto.